

# ***VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Francisco Lorenzo Gilsanz (coord.). Madrid: FOESSA, 2014***

José Manuel Parrilla Fernández  
**Universidad de Oviedo. Departamento de Sociología**  
jmparril@uniovi.es

El VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España ve la luz casi medio siglo después de que la recién creada Fundación FOESSA impulsara en 1966 el primer *Informe Sociológico sobre la situación social de España*. Desde entonces, la publicación de los sucesivos informes generales seriadados —denominados coloquialmente “los foessas”— constituye siempre un acontecimiento reseñable, pese a que la propia Fundación, de la mano y a demanda de su organización matriz, Cáritas Española, ha ido diversificando y ampliando el elenco de sus trabajos de análisis con una gran producción de estudios a cargo de reputados especialistas, además de promover desde finales de los años ochenta informes de carácter regional o provincial sobre pobreza en todas las comunidades autónomas del Estado.

Como es conocido, en sus primeros tiempos los foessas fueron casi el principal impulso a la Sociología Empírica en España, de la mano de Amando de Miguel, unos estudios que servían de contrapunto al discurso desarrollista de los gobiernos de la época y ponían de relieve los logros y deficiencias de los procesos acelerados de modernización de la sociedad española, abordando de forma amplia la realidad social en aspectos como población, estructura económica, alimentación, sanidad, educación, vivienda, trabajo, problemas sociales, actitudes básicas y pobreza. En el segundo informe, publicado en 1970, se añadieron ya otros aspectos como la estratificación y movilidad social, sectores marginados, familia, actitudes y valores, urbanismo y vida política y asociativa, este último censurado por las autoridades políticas del momento.

Aunque sin una periodicidad estable, los sucesivos informes FOESSA se han mantenido como

referencia de gran prestigio científico y utilidad social; todos ellos han ofrecido en cada ocasión una excelente panorámica de las transformaciones sociales de nuestro país, acompañada de los pertinentes análisis críticos de los retos que emergían de dichas realidades, especialmente en lo referido a la evolución de la pobreza y la exclusión social y sus factores, el desarrollo de las políticas sociales y, más recientemente, la perspectiva del desarrollo social de la sociedad española.

La estructura básica de los primeros foessas se mantuvo hasta el V Informe, publicado en 1994 con el subtítulo “Sociedad para todos en el año 2000”: se trataba de un estudio de tipo general en el que se analizaban las dimensiones antes citadas, a las que se incorporaron progresivamente otras como ocio y estilos de vida, acción social y servicios sociales o tecnologías de la información. Sin embargo, desde mediados de la década de los noventa, en un contexto en que la Sociología española contaba ya con abundante bibliografía y estudios sobre la realidad social promovidos por diversas instituciones y organizaciones, la Fundación FOESSA reorientó su tarea de conocimiento, análisis y diagnóstico de la situación social española para focalizar más la atención en los aspectos específicos relacionados con la exclusión y el desarrollo social.

Así, en el VI Informe, publicado en 2008 —tras un largo paréntesis de más de una década desde la publicación del anterior informe de la serie—, se analizaba la realidad española en aspectos como estructura social, desigualdad y pobreza, inmigración, las políticas sociales y sus actores, relaciones sociales y capital social y la cooperación internacional. Llevaba por título *Informe sobre exclusión y desarrollo social en España*, enunciado que da idea

clara de la nueva orientación de los foessas y que se mantendrá en el título del reciente VII Informe, que es objeto de esta reseña. La noción de “desarrollo social” quedaba establecida en el VI Informe como referencia a los procesos que mejoran simultáneamente los ámbitos materiales de producción de bienes y servicios, la reducción de las desigualdades de acceso a los mismos, los sistemas de empleo, la provisión de bienes públicos (salud, educación, vivienda) y protección social, el desarrollo del capital social y la promoción del capital relacional, así como la conservación y mejora del medio ambiente, entendiendo todo ello como una propuesta alternativa al crecimiento economicista, para volver a situar al sujeto como centro del proceso de desarrollo (cf. VI FOESSA, 81).

Los foessa han sido siempre trabajos de equipo, como su propia amplitud reclama. El presente VII Informe es también una obra colectiva, que ha contado con la participación de casi cien especialistas en los diferentes campos de análisis, coordinado por Francisco Lorenzo Gilsanz, joven sociólogo que cuenta ya con años de experiencia como coordinador de la Fundación FOESSA y responsable del equipo de estudios de Cáritas Española, tras recoger el testigo de su predecesor, Víctor Renes Ayala.

El punto de partida del VII Informe FOESSA se encuentra en el diagnóstico que sobre la sociedad española había realizado el informe de 2008; elaborado en unas circunstancias muy diferentes a las actuales —tras años de expansión económica, crecimiento del PIB y generación de empleo superior a la media europea—, FOESSA VI había puesto de relieve la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo social, señalando que los indicadores macroeconómicos estaban ocultando situaciones de vulnerabilidad extendidas que hacían del nuestro un modelo de integración precaria. Asimismo, se había constatado que el periodo de crecimiento económico anterior al estallido de la recesión no fue aprovechado de modo suficiente para consolidar un modelo integral de protección social capaz de prevenir, controlar y reducir los riesgos derivados de las estructuras de desigualdad existentes, de modo que tales estructuras habían consolidado la

precariedad como rasgo específico de un contexto aparentemente favorable.

Desde esas premisas, el VII Informe toma buena cuenta de la crisis actual, pero considerando que no es causa, sino consecuencia de un modelo social (cultural, económico, político, antropológico,...) concreto al que la propia crisis retroalimenta y fortalece. Si el crecimiento fue la clave de nuestro modelo social en tiempos de bonanza, en el período de crisis se constata que han sido las necesidades de ajuste las que han guiado las decisiones políticas, mediante reformas que están ocasionando el reforzamiento del principio de contributividad y el retroceso del principio de ciudadanía social, además de la reducción del gasto público y de sobrecargar tanto a las organizaciones del tercer sector como a las familias en la tarea de ofrecer la protección social que las administraciones no ofrecen o han dejado de ofrecer. De este modo, según detecta el Informe, la garantía de derechos queda desplazada por un discurso de tipo meritocrático y liberal que cada vez más tiende a responsabilizar al propio individuo de su bienestar y a disminuir las responsabilidades públicas respecto del mismo.

La base empírica del informe se encuentra en la explotación de la Encuesta Sobre Integración Social y Necesidades Sociales EINSFOESSA13, que supone la tercera oleada tras las realizadas en 2007, cuyos resultados se presentaron en el VI Informe, y en 2009, en el período intermedio entre VI y el VII informe; la oleada de 2009 estuvo motivada por la necesidad de conocer la incidencia de la grave crisis en la población residente en España, que en la de 2007 aún no se había desencadenado, y dio lugar a una publicación bajo el título *El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España* (FOESSA 2010).

Dada la particular situación creada por la crisis, habría sido de gran utilidad emplear algún tipo de muestra en panel, que permitiría un seguimiento longitudinal de los mismos hogares aportando una visión dinámica de las situaciones de exclusión o vulnerabilidad en cuanto a la salida de ellas, la permanencia cronificada o la recurrencia de eventos de exclusión en los mismos hogares. Un propósito que los responsables del informe han llegado a considerar y a intentar en la encuesta de 2009, si bien

se descartó por dificultades técnicas derivadas del diseño de la oleada previa. Para compensar en parte esa dificultad, en la oleada EINSFOESSA13 la muestra ha sido ampliada notablemente, llegando a 8776 entrevistas en otros tantos hogares (que aportan información sobre 24 775 personas) frente a los 3500 hogares de las oleadas de 2007 y 2009; ello ha limitado el margen de error al  $\pm 1\%$  para los hogares y al  $\pm 0,6\%$  para población. Con la finalidad de lograr en la muestra una representación suficiente de los hogares con indicios de exclusión, tomando referencia en una estimación previa de los hogares en tal situación basada en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2011, además del cuestionario principal se empleó un cuestionario filtro, este último específico para cada comunidad autónoma en relación al umbral de pobreza autonómico.

Asimismo los autores han llevado a cabo una revisión y actualización de los indicadores empleados para medir el fenómeno de la exclusión social. Así, se estudiaron seis grandes dimensiones: participación en la producción y en el consumo, participación política, acceso a los derechos sociales (educación, vivienda, salud) y a la protección social, relaciones sociales y conflictividad socio-familiar. Estas dimensiones han sido operacionalizadas mediante una batería de 35 indicadores básicos que miden aspectos como el empleo, los ingresos, las situaciones de privación, el acceso a la educación, la salud o la vivienda, la existencia de apoyos o situaciones conflictivas a nivel familiar o vecinal, las conductas asociales o el contar o no con apoyos en las redes familiares y sociales. Mediante la agregación ponderada de tales indicadores se elaboró un índice sintético de exclusión social que permite clasificar los hogares en cuatro categorías de análisis: integración plena, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa, útiles para analizar el perfil actual de la exclusión social así como la evolución experimentada desde 2007. Para garantizar la seguridad de esta comparación se ha realizado también la necesaria tarea de homogeneización del sistema de agregación de los indicadores de las tres oleadas de la encuesta EINSFOESSA.

Por otra parte, el Informe recoge como anexo el documento “Una aproximación a la evolución del bienestar social en España durante el auge y

la recesión. El Índice FOESSA de Bienestar Social (IFBS)”, cuya inclusión en el libro parece justificada como una aportación a la búsqueda incesante de mejoras en la medición del bienestar y el desarrollo social. Se presenta como un intento de crear un índice que, empleando datos secundarios en las dimensiones de bienestar material, distribución, seguridad y capital social, permita establecer una medición del grado de desarrollo social de la sociedad española. La aplicación de dicho índice al reciente período de crisis ilustra cómo han empeorado todas las dimensiones mencionadas, si bien la referida a capital social es la que mantiene un comportamiento más plano. No obstante, los autores reconocen la debilidad del índice IFBS elaborado a partir de otros indicadores agregados y no a partir de información de los individuos, por lo que presentan su trabajo como una incipiente tentativa de abrir un debate que pueda enriquecer los elementos conceptuales y estadísticos para mejorar dicho índice en el futuro.

El Informe se estructura en ocho capítulos y dos anexos, uno el arriba mencionado dedicado al Índice Foessa de Bienestar Social y otro sobre aspectos metodológicos, en el que se incluyen, como es preceptivo, los cuestionarios (principal y de filtro) utilizados para la EINSFOESSA13.

El primer capítulo, coordinado por Guillermo Fernández Mañillo y Víctor Renes, sirve como marco y toma de posición previa para los análisis de los capítulos siguientes. En él se reflexiona sobre el fracaso de un modelo basado en el “crecimiento sin sociedad”, que en el plano cultural e ideológico está llevando a la “privatización del vivir social”. Este proceso privatizador se contrapone con el desarrollo social y alienta la crisis de las instituciones del bienestar, con la consecuencia de que las políticas públicas abandonan progresivamente el enfoque universalista y el modelo social pierde la perspectiva de la cooperación para dejar cada vez más espacio a la competencia entre distintas colectividades por unos recursos cada vez más escasos.

Los capítulos segundo al cuarto abordan tres grandes aspectos que configuran la situación social actual, a saber: la distribución de la renta y

las condiciones de vida; el incremento de la desigualdad y la exclusión; y la situación del mercado laboral como factor altamente determinante de la pobreza y la vulnerabilidad.

El capítulo segundo, confiado a un amplio equipo coordinado por Luis Ayala, aborda la distribución de la renta, la evolución de las condiciones de vida de la población, así como el alcance de las políticas redistributivas. Al respecto sostiene que el grave aumento de la desigualdad experimentado en los años de la crisis debe ser entendido no como una mera secuela de la misma, sino una consecuencia del modelo distributivo vigente en las dos últimas décadas. Tal modelo, caracterizado por la alta vulnerabilidad de una parte no pequeña de la población cuyos ingresos son inestables, explica que la desigualdad aumente en períodos de recesión sin que se reduzca significativamente en épocas de bonanza económica.

La pobreza de rentas ha aumentado pese al descenso del umbral de pobreza, determinado por la disminución de la renta media. Entre los años de bonanza y la crisis ha aumentado un 10 % la extensión (del 20 al 22 %) y un 31 % la intensidad de la pobreza, medida a través de la brecha de ingreso entre la renta media de los pobres y el umbral de pobreza (puede verse con detalle en el Documento de Trabajo 2.2 elaborado por Rosa Martínez y Carolina Navarro). La aplicación de un umbral de pobreza anclado en el inicio de la crisis (año 2008) sirve para describir mejor el escenario: con el umbral de pobreza anclado, el riesgo global de pobreza aumenta en siete puntos (no en dos) entre 2008 y 2012, lo que supone un incremento porcentual del 35 %.

Además, el aumento de la intensidad de la pobreza refleja un cambio en el perfil de la población de baja renta por efecto del desempleo: si antes de la crisis los pensionistas eran la principal categoría representada en las decilas inferiores de la distribución de ingresos, con la crisis son cada vez más familias en edad de trabajar, con problemas de desempleo o subempleo, las que ocupan esas posiciones; ello provoca el rejuvenecimiento de la población pobre y, de modo indirecto, explica el aumento en la tasa de riesgo de pobreza infantil. La alarmante afectación de la pobreza en los hogares españoles con niños es también un claro indicador de las deficiencias de la protección con que cuen-

tan este tipo de hogares en España, mucho menor que en otros países europeos.

En conjunto, las políticas de protección económica se muestran insuficientes, lo que se evidencia en el aumento de las situaciones de pobreza vinculadas al desempleo, con tasas de cobertura menguantes, así como en los trabajadores de bajos salarios, que apenas cuentan con dispositivos específicos de protección, siendo las redes informales y familiares quienes sirven de amortiguador, aunque lejos de evitar el gran aumento de la pobreza experimentado.

Una consideración particular sobre el sistema fiscal (ampliada en el Documento de Trabajo 2.6 firmado por Jesús Ruiz-Huerta) evidencia su limitada y decreciente incidencia sobre la distribución de la renta, especialmente por la regresividad de los impuestos indirectos; frente a ello, advierte que las recomendaciones de las instituciones internacionales acerca de reducir el peso del IRPF y ampliar los impuestos indirectos como el IVA, tendría consecuencias distributivas negativas para la equidad del sistema. Por ello aboga por una defensa de la progresividad fiscal para reforzar el efecto redistributivo del IRPF, recordando que los países con índices más bajos de desigualdad suelen disponer de impuestos directos potentes y sistemas fiscales equilibrados y que apostar por el modelo europeo de bienestar implica mantener un nivel de presión fiscal elevado, con un peso importante de impuestos directos, para poder financiar los servicios públicos y garantizar estándares de igualdad, seguridad individual y bienestar inexistentes en sociedades con baja presión fiscal y un sector público menos desarrollado.

Leyendo estas consideraciones, uno no puede dejar de sorprenderse ante la insistencia de tantos líderes políticos en la promesa de “bajar los impuestos” y más aún sorprende que tal promesa cale en la población y se transforme en votos, en muchos casos a causa de la falsa conciencia desarrollada por esas clases medias ahora venidas a menos así como por la escasa percepción de que las bajadas de impuestos directos siempre son compensadas por incrementos de los indirectos, por definición más inequitativos. Una clara conciencia fiscal y una exigencia decidida contra el fraude aparecen

como componentes indispensables de una nueva conciencia cívica que será preciso promover y educar para transformar el modelo social excluyente que hemos construido y tolerado en otro modelo con más equidad.

Tras el estudio de la distribución de la renta, el capítulo tercero, coordinado por Miguel Laparra, se dedica al análisis de los procesos de exclusión social, constatando que los hogares que disfrutaban de una integración plena disminuyen del 47 % en 2008 al 37 % en 2013, mientras aumentan los que presentan integración precaria (del 37 % al 41 %), exclusión moderada (del 10 % al 13 %) y exclusión severa (del 5,5 % al 8,8 %). Si lo trasladamos a población resulta que en integración precaria se sitúa actualmente el 40 % de la población residente en nuestro país, en exclusión moderada el 14 % y en exclusión severa un 11 %; ello significa que poco más de un tercio de la población residente en España goza de integración plena. La dinámica de la exclusión social en España se expresa de forma condensada mediante el Índice Sintético de Exclusión Social (ISES), que resulta de la suma ponderada de los indicadores y toma como referencia base la oleada de 2007, donde a partir del valor 1 como media para el conjunto de la población, el valor 0 significa integración plena, valores entre 0 y 2 integración precaria, entre 2 y 4 exclusión moderada y valores superiores a 4 suponen exclusión severa. El ISES ha pasado del 1,03 en el año 2007 al 1,21 en 2009 y al 1,50 en 2013, lo que lleva a los autores a advertir del peligro que para la cohesión social supone una “fractura social” que se ha ensanchado un 45 % en este periodo.

El análisis de la exclusión pone de manifiesto que el deterioro en la situación económica de muchos hogares se asocia de manera más significativa o las dificultades para el acceso al empleo (se han triplicado), a las dificultades en salud (se han duplicado) y los problemas de calidad de la vivienda (han aumentado en torno al 50 %). La conjunción del deterioro de tales factores alimenta un riesgo de espiral de la exclusión que puede atrapar a las personas en procesos de exclusión multidimensional cronificados.

El análisis de la integración-exclusión por territorios evidencia que no hay una relación consistente

entre la riqueza regional y los niveles de integración social, dándose además diferencias sustanciales en la incidencia de la exclusión en regiones con niveles de riqueza similares. Por lo que toca al papel de las familias y las redes informales (ayuda informal, entidades sociales, voluntariado), el informe señala que es esta una de las fortalezas de la sociedad española, pero advierte de que no pueden seguir soportando unas cargas que agoten sus capacidades ni deben suplir a las administraciones públicas como garantes de la integración social.

En tal sentido, el informe somete a análisis las políticas de protección social. Por un lado constata que los subsidios de desempleo han evitado durante un tiempo un mayor aumento de la pobreza y las pensiones han servido en muchos casos para sustentar la economía de un tercio de los hogares afectados por el desempleo. Pero la valoración es más crítica con otros dispositivos (especialmente nuevas prestaciones como PREPARA o PRODI), por su carácter semicontributivo que excluye a buena parte de la población y por ser prestaciones de duración limitada, insuficiente ante la prolongación de la actual crisis. Por lo demás, los recortes aplicados en educación y sanidad tienen mayor impacto negativo en los grupos más vulnerables.

Todo ello lleva a un diagnóstico según el cual se ha deteriorado el efecto amortiguador de las políticas sociales, por lo que los autores reclaman una revisión del papel de las políticas públicas afirmando la “necesidad de priorizar la atención a los fenómenos de exclusión y la pobreza severa” que apoyan en tres argumentos: la prioridad de quienes peor están, los derechos humanos y la convivencia y sostenibilidad social que suponen un bien colectivo a salvaguardar. Desde esa prioridad se insiste en la necesidad de reformar y ampliar la cobertura del sistema de garantía de ingresos mínimos, reforzar las políticas activas para dar oportunidades vitales, de ocupación y empleo a las personas excluidas, con implicación del sistema educativo, de los servicios de empleo y de los servicios sociales, sin olvidar los ámbitos de la vivienda y la salud, como elementos todos de una planificación efectiva en la lucha contra la exclusión.

La evolución del mercado laboral, por su papel crucial en la integración social, es objeto de análisis

en el capítulo cuarto del Informe, coordinado por Carlos García Serrano y Miguel Ángel Malo. Pone de manifiesto que en España se está produciendo un bloqueo en la entrada del mercado de trabajo, así como una polarización del empleo, que se ha especializado en empleos de bajo valor añadido. La intensidad de la crisis en España se ha reflejado en una caída de los flujos de entrada y de salida del empleo: los que entran en el mercado de trabajo durante los años de crisis tienen grandes dificultades para encontrar un empleo y quienes lo pierden tienen graves dificultades para ser contratados de nuevo.

El capítulo pone el foco en el análisis generacional, mostrando mediante el análisis de trayectorias laborales que la situación de los trabajadores de baja cualificación, especialmente los jóvenes, se caracteriza por una dilación del proceso de integración laboral, que sin embargo afecta también a otros trabajadores con escasa formación; son quienes van a sufrir periodos mucho más largos de desempleo y conforman una especie de “generación expulsada”, para la que resulta improbable que puedan volver al empleo a corto plazo incluso en caso de que se recupere la economía y la contratación.

La temporalidad de los empleos también aumenta y provoca retraso en los procesos de integración laboral, lo que incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes ante la crisis de larga duración. El efecto de ésta sobre el empleo de las mujeres es menos acusado que en los varones en cuanto a la reducción de las tasas de ocupación. Los empleos de bajos salarios, estimados entre el 15 y el 20 %, sin embargo no se han incrementado tanto como cabría esperar en la crisis, en parte porque son el tipo de empleos que más se han destruido.

Por último, el capítulo analiza las cualificaciones o capital humano de la población en edad de trabajar mostrando que persiste un claro déficit respecto a los países de nuestro entorno incluso en la población joven, que presenta una tendencia a la polarización entre muy cualificados y poco cualificados. Además, el fenómeno de la sobrecualificación es intenso, con gran dificultad para la integración laboral de los más cualificados, que no siempre se resuelve con la edad, sino con la reducción de expectativas de estos trabajadores más formados,

lo que además de provocar frustración personal supone un despilfarro de recursos. No obstante, el informe señala que persiste aún el problema de la falta de personas con cualificaciones intermedias, lo que apunta a un reto sin resolver en el sistema educativo.

El análisis del Estado de bienestar español, su evolución y crisis en el marco del llamado Modelo Social Europeo, así como su repercusión en las políticas sociales, constituye el objeto del capítulo quinto del Informe, confiado a la coordinación de Gregorio Rodríguez Cabrero. En su habitual línea de análisis del proceso histórico de la reforma social en España, sugiere que estamos ante el posible final de un ciclo histórico de reforma social (1963-2010), caracterizado por la modernización, la democratización y la europeización de la sociedad y la política social española y por un Estado de Bienestar de limitado alcance para reducir las desigualdades debido a su desarrollo tardío y subordinado.

La pertenencia a la UE supone que tanto las políticas económicas como las sociales vienen fuertemente determinadas, lo que en el contexto de la crisis ha producido un retraimiento de las pretensiones del Modelo Social Europeo en cuanto a cohesión social, inclusión y respeto a los derechos de las personas. Así, la crisis del Euro aparece también como una verdadera crisis de los valores europeos, manifestada en la debilidad de las políticas de cohesión e inclusión, drásticamente subordinadas a los dictados ideológicos y económicos de la austeridad y que plantean un grave interrogante sobre el futuro de las mismas.

Teniendo en cuenta los condicionantes externos pero también los internos (dualización social y laboral, desequilibrios territoriales, papel de los diferentes actores), abunda en los perfiles del Estado de bienestar español, señalando como notas definitorias la universalización de baja intensidad protectora, la privatización selectiva creciente, cierta asistencialización fragmentada bajo la lógica de la activación, la sobrecarga de los hogares y las fuertes limitaciones en la gestión de los nuevos riesgos sociales.

El diagnóstico sobre el Estado de bienestar español es justificadamente severo, pues en su desarrollo reciente considera el Informe que se ha pro-

ducido una regresión en las políticas sociales, como efecto combinado de la contención del gasto social y la reestructuración institucional (recalibración entre políticas y gasto social), en un escenario de ausencia de diálogo social. Esta regresión se muestra mediante el análisis de las reformas recientes en las políticas sociales: por un lado las referidas al mercado de trabajo suponen mayor flexibilidad y abaratamiento del coste del factor trabajo; las reformas en la protección social han supuesto endurecimiento de los requisitos de acceso, refuerzo del principio contributivo y acentuación del requisito de activación; y por lo que toca a las reformas de los servicios de bienestar, señala como efectos la universalización limitada por el retorno al principio contributivo (sanidad), por el traslado de crecientes costes a los hogares (sanidad, educación, servicios sociales), por la reducción del gasto social y por la privatización selectiva de algunos servicios.

Todo ello dibuja, a juicio de los autores, un panorama de verdadera crisis del Estado de bienestar español con diversos impactos sociales, entre los que destaca la escasa efectividad en la lucha contra la pobreza, la existencia de grupos de riesgo con cronicidad de la pobreza infantil, los bloqueos en las transiciones laborales y de jubilación y los desiguales resultados y efectividad limitada de los planes de inclusión que se formularon en la década pasada bajo el impulso de las directrices europeas.

El capítulo concluye con un apartado prospectivo que reflexiona sobre el escenario de la reforma social en un contexto de cambio del marco global que conduce a un dilema en la orientación del modelo social: o se orienta hacia la privatización e individualización de los riesgos sociales, siguiendo la tendencia dominante actual, o se orienta hacia nuevas formas de institucionalización y socialización de los mismos. Esta última opción reclama que la salida de la crisis se aborde como una nueva formulación del pacto social, que apueste por una economía sostenible, con empleo y servicios sociales de calidad y una gobernanza basada en el diálogo social, con incorporación de nuevos actores como los movimientos sociales y asociativos.

El capítulo sexto, coordinado por Imanol Zuberu, conecta con la reflexión crítica sobre el mo-

delo social que se plantea en el capítulo primero. Aquí se formula un doble interrogante que focaliza y da perspectiva a los retos actuales de la sociedad española: ¿qué sociedad saldrá de la crisis y qué salida de la crisis impulsará la sociedad? Es un capítulo con una fuerte impronta ético-social, constatable especialmente si se leen los documentos de trabajo vinculados al mismo y accesibles en la excelente página web que complementa de forma sobresaliente la publicación del informe en formato papel. Propone un dilema sobre qué sociedad queremos ser: una sociedad que fie todo al crecimiento económico y reproduzca los caminos que nos han llevado a la situación actual de crisis y espectacular aumento de la desigualdad; o una sociedad que apueste decididamente por el desarrollo social, de modo que la economía, las políticas sociales y los valores cívicos se armonicen para conseguir una sociedad inclusiva, si no más rica, sí más solidaria y equitativa.

Para ello, el Informe denuncia los “círculos viciosos” de la desconfianza, la precariedad, la exclusión o la impotencia política que afectan principalmente a “ese poroso grupo social que se ha dado en llamar clases medias”, del que “depende en gran medida cuál sea la evolución futura de las políticas sociales y del Estado de bienestar”: ya como ganadoras que aspiran a mantener su situación o como perdedoras que luchan contra el deterioro de la misma, las clases medias pueden acabar promoviendo la ruptura del universalismo característico del Estado de bienestar socialdemócrata. Ante ese escenario —que a juicio de quien suscribe esta reseña ya no es mera hipótesis—, los autores se decantan por un replanteamiento moral tanto de la economía como de la vida social, habida cuenta de que consolidar un Estado de bienestar redistributivo requiere superar esos círculos viciosos mediante un círculo virtuoso basado en dos elementos: por un lado, la moralización de la cultura cívica, que sirva de cimentación a unas preferencias económicas y sociales alternativas al modelo dominante; y por el otro el reforzamiento de las instituciones reguladoras, que permita revertir el “proceso privatizador del vivir social” que está en marcha.

El capítulo séptimo, coordinado por Fernando Vidal y Germán Jaraíz, se dedica al capital social

y cultural, estudiando las relaciones familiares y comunitarias así como las vicisitudes de la participación política y asociativa. Los datos de las sucesivas oleadas de la encuesta EINSFOESSA muestran que en el período de la crisis por una parte se ha reforzado el papel de la familia y de las relaciones comunitarias y por otra se produce un empobrecimiento del capital asociativo. La “baja densidad” de la sociedad civil española sigue siendo una carencia importante, que los autores vinculan al desinterés de las élites en fomentar la participación así como a la influencia del paradigma neoliberal, que promueve un modo sesgado de universalización basado en el individualismo y la desigualdad.

Por lo que respecta al papel de la familia, el estudio constata su “refortalecimiento” en respuesta a la retracción de los mecanismos de apoyo vinculados a las políticas públicas, algo que también ocurre con las relaciones vecinales. La posición de las personas mayores en el sistema familiar se ha modificado en el sentido de que no sólo aportan tareas de cuidado sino que frecuentemente sus ingresos por pensiones se convierten en el soporte principal o único de la economía familiar. El apoyo familiar y vecinal se hace mucho más necesario en el caso de las personas pobres y excluidas, especialmente cuando se produce la retirada de otros apoyos públicos; sin embargo, las mismas situaciones de exclusión aumentan el riesgo de desgaste del apoyo comunitario y de aislamiento de las personas excluidas.

En cuanto a la participación política, el tono general que detecta el informe es de desconfianza en las instituciones y actores políticos clásicos, actitud que se acentúa en las personas pobres y excluidas y en quienes pierden el empleo o viven en zonas marginales. No obstante, emerge cierto aprecio por la reciente ola de movilización ciudadana (52 %), si bien no se corresponde con una efectiva participación en dichos movimientos o asociaciones, en los que solamente un 23 % manifiesta haber participado. Pese a la pérdida de un 25 % en la tasa de asociacionismo que arroja la EINSFOESSA entre 2007 y 2013, los autores valoran la intensa movilización colectiva y la creación de iniciativas cívico-comunitarias como atisbos de una

nueva creatividad social capaz de promover valores cívicos y redes de solidaridad que apuntan a una regeneración de las instituciones. En tal sentido consideran que aspectos como la garantía de derechos, la cohesión social o la participación deben ser claves de unas nuevas prácticas que orienten la agenda de las políticas públicas.

El capítulo octavo es coordinado por Pedro José Gómez Serrano y presenta una panorámica del papel de España en el entorno internacional, especialmente en el contexto de la crisis. Un primer apartado se dedica a interpretar la situación española en la crisis internacional, evitando desviar la responsabilidad hacia instancias externas y proponiendo una autocrítica del modelo productivo y social. También analiza la acción española en materia de pobreza en relación a la UE, poniendo de manifiesto no sólo el crónico retraso español en el volumen de gasto en protección social, sino la tendencia a producir aumentos de la pobreza por la vía del desempleo y la disminución de los salarios, alentada por una política de respuesta a la crisis basada en reducciones del gasto público a las que se subordina cualquier otra necesidad.

La acción española en la cooperación internacional es también estudiada en este capítulo del Informe. Al respecto se constata que la ayuda al desarrollo ha pasado a ocupar un lugar marginal en la estrategia internacional del Estado español, habiéndose convertido en moneda de cambio frente a otros recortes muy sensibles que podían tener un coste político mayor. Ello ha supuesto que los grandes avances logrados en esta materia desde los inicios del siglo XXI se hayan esfumado durante el período de crisis, volviendo a situar a España como uno de los países menos comprometidos con la cooperación internacional.

Tras el recorrido por los capítulos de la obra es preciso poner de relieve que el VII Informe FOESSA es mucho más que el libro publicado. Los más de cincuenta trabajos monográficos que sirven de base al informe están disponibles en la excelente página web de acceso libre <http://www.foessa2014.es/informe/>, donde también se dispone de resúmenes de texto de los capítulos y de videos de 6-8 minutos en los que cada capítulo se sintetiza de forma muy asequible, con la voz y la imagen de sus principales



autores. Asimismo, los informes regionales realizados con la misma encuesta EINSFOESSA13 han sido también incorporados a la web y suponen un complemento excelente para el análisis pormenorizado de la exclusión en los diferentes territorios del Estado.

Todo ello constituye un material de uso docente y divulgativo que junto con la parte más científica del Informe hace de él una versátil herramienta de máxima utilidad para el científico social interesado en las políticas sociales, la exclusión o el desarrollo social, pero también para los docentes en el campo de la Sociología o el Trabajo Social así como para

los profesionales y demás actores del sistema de servicios sociales o los responsables políticos de los mismos.

Es de destacar que el disponer de esta herramienta digital tan accesible permite que también la población en general encuentre en el VII Informe FOESSA no sólo unos diagnósticos bien fundamentados sobre la sociedad española en la crisis, sino también una presentación accesible para el no experto, además de sugerentes líneas de propuesta de renovación de la acción social que han de ser inspiradoras de nuevas prácticas políticas, sociales y culturales que favorezcan el desarrollo social.